

del 60 % de la sintonía; por último, también contaban con lo más importante: «la neutralidad de las Fuerzas Armadas».

Los generales «reformistas», a través de Orlando Urbina Herrera y Washington Carrasco, habían hecho saber a Orlando Sáenz y sus asociados, que «si ustedes quieren cambiar de presidente como la Constitución lo permite, con plebiscito, entonces estamos de acuerdo, no entrabaremos esa acción». Los generales «constitucionalistas», a través de Augusto Pinochet, habían hecho saber lo mismo. Y los generales «duros» apoyaban el plan porque tenía que ver exactamente con lo que ellos planteaban desde septiembre de 1970.

Sin embargo, los generales «reformistas» insistieron en que ellos estimaban que «había un error de apreciación» en lo acordado por la Sociedad de Fomento Fabril. Que todavía no era tiempo «de entrar en temores», que la capacidad de Allende, su «muñeca política» como él mismo la llamaba, no estaba agotada para «calmar a los trabajadores y hacerlos entrar en razón».

Los dirigentes políticos del Partido Nacional, encabezados por Onofre Jarpa y los senadores Pedro Ibáñez y Francisco Bulnes, más los diputados Patricio Phillips y Fernando Maturana y el grupo de Eduardo Frei de la Democracia Cristiana, compuesto principalmente por su ex ministro de Defensa, Juan de Dios Carmona, los senadores Juan Hamilton y Patricio Aylwin y el empleado del grupo Yarur-Rockefeller, Felipe Amunategui Stewart, son los que recibieron el encargo de la Sociedad de Fomento Fabril, Sociedad Nacional de Agricultura y Confederación Nacional de la Producción y el Comercio, de poner en marcha la campaña.

El día primero de octubre de 1971, la Sociedad de Fomento Fabril abrió el fuego al publicar un comentario sobre la gestión de la Unidad Popular, dando «un balance sobre los resultados alcanzados: el Gobierno profundamente afectado en su prestigio y expuesto a un juicio político; importantes sectores industriales vejados y damnificados en sus derechos; una opinión pública desconcertada y perpleja; y lo que es peor: ninguno de los objetivos buscados logrados».

Las ollas vacías

En noviembre de 1971 ya estaban desatados todos los efectos de desabastecimiento producidos por la redistribución de ingre-

sos en los sectores más postergados de la sociedad chilena y la falta de flexibilidad del sistema productivo, de carácter capitalista y dependiente, que funcionaba con un criterio selectivo de consumo para las capas altas en cantidad más que suficiente y de déficit de consumo para gigantescos sectores de obreros y campesinos.

Las cifras preliminares de noviembre, decían que el consumo de aves, porcinos y patatas había aumentado en ese año en 16 %, 18 % y 55 %, respectivamente. El consumo de azúcar aumentaba en un 37 %. Pero el aparato productivo había tocado su techo, y la escasez de esos mismos productos en el mercado afectaba a amplios sectores de empleados, pequeños y medianos, empresarios y que no estaban en el circuito de abastecimiento popular directo a través de sindicatos y federaciones de sindicatos.

En Santiago, principalmente, las colas de personas para conseguir una vez a la semana, o una vez cada quince días carne de ave o azúcar, eran impresionantes. El mercado negro de esos productos comenzaba a aparecer.

El 4 de noviembre, en la celebración del primer año de Gobierno, el presidente Allende pronunció un discurso ante unas ochenta mil personas, y se refirió al tema:

«Ha habido escasez transitoria de algunos productos, por el mayor poder de compra de las masas, por la tendencia al acaparamiento de ciertos sectores que compran más de lo que necesitan. Si necesitan tres o cinco kilos de carne, y la encuentran en venta, compran diez o doce, y la guardan en su refrigerador. Hay una presión psicológica que hace que la gente compre más de lo que necesita. Y también debemos reconocer que hay especulación en los barrios... En el caso de la carne, por otra parte, al comienzo de nuestro Gobierno salieron de las fronteras de Chile más de doscientas mil cabezas de ganado vacuno.»

«La presión psicológica» corría por cuenta de los medios de comunicación de masas, propiedad de los monopolios privados y de sus partidos políticos, que tenían en marcha una campaña de noticias destinadas a crear pánico de compra en la población.

En el mismo discurso, Allende trató de disuadir a centenares de miles de campesinos, obreros y empleados que viendo a los monopolios privados seguir mandando en la economía, buscaban como salida el ocupar las empresas monopólicas sorprendidas en acaparamiento, exigir su expropiación y ocupar los predios de los latifundistas que, por otra parte, servían de campo de adies-

tramiento para grupos fascistas, asesorados por expertos militares de la Infantería de Marina, de la Fuerza Aérea, de la Escuela de Paracaidismo y Fuerzas Especiales del Ejército. Allende llamaba a eso «tomas indiscriminadas» para caratularlas de «extremismo de izquierda».

Dijo Allende: «Es por eso que no aceptamos la presión, lo hemos dicho con honradez de revolucionarios. Estamos contra todas las tomas indiscriminadas de fondos que crean anarquía en la producción y que terminarán por lanzar a los campesinos contra campesinos o a los campesinos contra pequeños agricultores... Estamos contra las tomas de vivienda que perjudican a los trabajadores que juntaron sus cuotas para adquirirlas. Estamos contra las tomas de las pequeñas y medianas fábricas por los obreros; la estatización y la requisición de las empresas deben obedecer a un plan de Gobierno y no a la anarquía del impulso voluntario de unos cuantos.»

Es notable comprobar cómo, nunca en los tres años de Gobierno, ni Salvador Allende ni las directivas de los partidos comunista y socialista, estuvieron de acuerdo con la enorme movilización de las masas que pugnaban por salir adelante en su lucha contra la oligarquía y el imperialismo de los Estados Unidos. Siempre frenaron, en la medida de sus fuerzas, las manifestaciones de «sabiduría política instintiva de los trabajadores», que trataban de obligar a Allende y la Unidad Popular a expropiar de una vez a las principales empresas monopólicas industriales, auténtica llave maestra de todo el plan económico de Gobierno, para poder cambiar la estructura de producción del país. En 1971, esto era posible, aun en el caso de hacerlo al mismo tiempo de ceder en «negociaciones largas para ganar tiempo» con la Anaconda y la Kennecott. Pero la ocasión fue desperdiciada por el afán de Salvador Allende de «mantener tranquilas a las Fuerzas Armadas», incluso sabiendo que en aquella época su cohesión era muy frágil y no estaban de ninguna manera en buena posición para intentar un golpe insurreccional con posibilidades de victoria. Probablemente, si la movilización de las masas se hubiera alentado y organizado en vez de desarticulado y frenado, el «frente de lucha antiimperialista y antioligárquico» hubiera tomado una dimensión tal que hubiera sido imposible para las Fuerzas Armadas chilenas y el imperialismo norteamericano salir en defensa del antiguo orden económico.

Pero volvamos al desabastecimiento. Durante todo el mes

de noviembre de 1971 las directivas de la Democracia Cristiana y del Partido Nacional promovieron una manifestación pública para expresar «la protesta del pueblo por el hambre que aflige a nuestros hogares».

En la tarde del 2 de diciembre, desde el barrio alto de la ciudad de Santiago, donde se concentra el 90 % de las personas que más ingresos económicos tienen en Chile, se descolgaron unas cincuenta mil mujeres, flanqueadas por jóvenes de los grupos de choque de la Democracia Cristiana, el Partido Nacional y la naciente organización fascista Patria y Libertad. La abrumadora mayoría de estas mujeres eran las esposas de gerentes, altos ejecutivos y empresarios grandes y monopólicos, además de empleados de alto nivel de renta. Eligieron como símbolo del desfile ollas vacías y cucharas. Cada manifestante portaba una olla vacía, de aluminio, y una cuchara. Golpeando una con la otra, el ruido era ensordecedor y atemorizante. Así, tronando, las mujeres del barrio alto de Santiago bajaron hasta el centro de la ciudad y, provocando un enfrentamiento con los carabineros quisieron rodear el Palacio de La Moneda. El enfrentamiento se produjo. Y durante dos o tres horas, al anochecer de ese día, todo el barrio central fue escenario de una batalla campal entre la policía militarizada y las mujeres manifestantes.

En aquella tarde, el autor de este reportaje vio el «embrión» de lo que sería más tarde, a partir del 11 de septiembre de 1973, la más increíble ferocidad desatada de un ser humano sobre otro. Mujeres muy bien vestidas, de hermosas figuras y delicado caminar, que uno había visto siempre en los estrenos de gala del cine o del teatro, o en los comedores de restaurantes elegantes limpiándose delicadamente la boca, gritaban desaforadas por las calles las groserías más increíbles contra el presidente Allende. Una de esas frases: «Allende maricón, ya no sirves ni para el colchón.» Vi a varias de ellas echarse encima de jóvenes que gritaban: «Viva Allende», golpearlos con las ollas y, en un caso, después de tener atrapado a un niño de unos 15 años, dos mujeres, una de las cuales llevaba un collar de perlas, lo sujetaron contra el suelo, le reventaron los pantalones por la cintura, se los bajaron y comenzaron a golpearle en los testículos mientras una chillaba: «Cámpemos a este hijo de puta» y se esforzaba por sacarle los genitales por entre los calzoncillos. La llegada de una patrulla salvó al niño.

Esta horrible brutalidad en ciernes mostrada por las mujeres del barrio alto el 2 de diciembre de 1971, tomaría una dimensión apocalíptica a partir del 11 de septiembre de 1973, cuando decenas de miles de hombres, mujeres, ancianos y hasta niños fueron torturados con un salvajismo sin límites, llegando al extremo de la violación en grupo de prisioneras y de la castración de prisioneros por las Fuerzas Armadas, por simple distracción, a la voz de «bajémosle la moral a estas mierdas marxistas».

La marcha de las ollas vacías obligó a Allende a declarar «zona de emergencia» la ciudad de Santiago, que quedó bajo jurisdicción militar por algunos días. Había sido la primera etapa de la campaña para tratar de derrocar a Allende «por medios legales».

El área social

El 9 de febrero de 1972, la mayoría demócratacristiana y nacional en el Parlamento cumplió con las órdenes impartidas por la Sociedad de Fomento Fabril poco más de cuatro meses antes: aprobó una reforma constitucional para fijar las normas del «Área de Propiedad Social», cuyos autores habían sido los senadores Juan Hamilton y Renán Fuentealba. (Juan Hamilton estaba ligado a los magnates de la construcción Soza Cousiño y a los monopolistas del hierro Klein, los cuales, aunque chilenos, tenían todos sus capitales en Suiza y Canadá. Estos Klein fueron muy favorecidos por el Gobierno de Eduardo Frei, y le instalaron al ex Presidente y a otros políticos demócratacristianos una cadena de hoteles de lujo en la Costa Brava, España, como pago por esos favores recibidos.)

La «reforma constitucional» de Hamilton y Fuentealba era una verdadera bomba de tiempo: el presidente Allende estaba obligado a promulgarla porque, si no lo hacía, rompería la letra de la Constitución política, cosa que esperaban los opositores para destituirlo. Y Allende no podía promulgarla porque su texto era simplemente un congelamiento del «Área de Propiedad Social», dejándola inútil como herramienta de activación y ordenamiento del aparato productivo nacional a fin de cumplir los planes de la Unidad Popular. Una síntesis de esa reforma constitucional permite señalar los siguientes puntos: